



Nota Editorial

En esta nueva versión de Tinta Viva consideramos fundamental desde Cartografía Sur analizar la situación respecto a las exigencias del nuevo gobierno en el marco de un acuerdo de paz. El país está atravesando por un escenario complejo en términos militares en donde sigue siendo la sociedad civil la principal afectada.

UN PROCESO DE PAZ ACORRALADO

A un mes de haberse posesionado Iván Duque a la presidencia de Colombia se tiene una primera crisis del proceso de paz adelantado con el ELN.



Esta crisis está enmarcada en la exigencia por parte del gobierno para la liberación de todos los secuestrados como premisa para el nombramiento del equipo negociador por parte del gobierno y así darle continuación a la mesa iniciada por el gobierno Santos.

A primera vista y de acuerdo a la forma como presentan la problemática los medios de comunicación masivos, parece justa la petición del gobierno para seguir el proceso de negociación, sin embargo, las exigencias unilaterales son una dificultad en medio de un diálogo nacional para buscar una salida negociada al conflicto social, político y armado que atraviesa el país hace más de 6 décadas. Primero, el

gobierno está desconociendo los pactos preliminares al iniciar este necesario proceso de paz en donde se acordó negociar en medio del conflicto armado; segundo porque una negociación requiere necesariamente que las dos partes avancen y den muestra de la voluntad política con acciones.

Si bien es absolutamente necesario que se dé paso a la liberación de secuestrados como una consigna que promueve la defensa de los derechos humanos, es necesario también que el gobierno actual reconozca y desarrolle acciones afirmativas ante la sistematicidad de las muertes

de líderes sociales y excombatientes de las FARC. No es posible continuar un proceso de negociación donde una de las partes hace exigencias unilaterales, acorralando así la posibilidad de continuar el proceso hacia un buen término y quitándole la posibilidad a los y las colombianas de vivir en un país en paz.

Después de 6 años de negociaciones, un sinfín de discusiones, conversatorios, espacios de análisis político e intenciones, no es posible que el gobierno del presidente Duque reduzca la paz al silenciamiento de fusiles. Reiteramos que para gran parte de la sociedad colombiana, la paz



afectivamente pasa por tener territorios sin violencias, pero también pasa por la garantía de condiciones de vida digna, la garantía para las nuevas generaciones de trazar historias que no estén atravesadas por sangre y garantías del libre ejercicio de la oposición política sin que esto nos cueste la vida.

Un proceso de paz no se puede reducir a las exigencias de una de las partes, un proceso de paz debe ser la posibilidad y la voluntad política

de las dos partes para que Colombia salga de las desigualdades sociales que tanto nos han costado a los y las colombianas. Como sociedad civil seguimos firmes y convencidas que el camino hacia la paz debe traer cambios estructurales a la sociedad y hacemos un llamado para que el nuevo gobierno avance en las negociaciones con un cese al fuego bilateral y sin poner a tambalear esta posibilidad haciendo exigencias y no mostrando resultados.

La sistematicidad en asesinatos a líderes/as y excombatientes es una nueva ola de exterminio de la diferencia, una nueva ola que ha cubierto de sangre nuestros territorios y que tiene la intención de desestructurar la organización social como premisa de la democracia; a cada persona asesinada le ponemos rostro y exigimos que no pase por este gobierno como una cifra más. Exigimos también pare la estigmatización de los/as líderes sociales a través de afirmaciones como la del ministro de defensa Guillermo Botero, quién irresponsablemente dice que la financiación de la protesta social se hace con dinero ilícito, este tipo de discursos son una forma de invisibilizar la lucha y las justas exigencias de los movimientos sociales.

Nos unimos al llamado hecho por distintas organizaciones y plataformas en el parque de los

periodistas el pasado viernes 7 de septiembre para que el actual gobierno y la institucionalidad estatal tome las medidas necesarias y garantice la vida de los y las líderes sociales y excombatientes, para que se asuma su responsabilidad en la negligencia de investigaciones y prevención de estos asesinatos. Como el alto comisionado Miguel Ceballos anuncio que seguirán exigiendo al ELN cesar sus operaciones militares, la sociedad civil, también exigimos un cese bilateral para evitar derramamiento de sangre inocente y avanzar en un verdadero camino de paz con justicia social.

Cartografía Sur.

Toda la información aquí contenida es reponsabilidad de la autora y del equipo editorial de Cartografía Sur

Amenazas de las "Águilas Negras"



¿Nubarrones en el horizonte?





**UN PROCESO DE
PAZ
ACORRALADO**

Karina Santos Matiz

**No. 5.
Septiembre de 2018
Bogotá - Colombia**